

## El Concepto de Nación: vigencia y perspectivas

EDUARDO PEDRO VACA

Indagamos hoy acerca de la vigencia del concepto de nación. Y ésta no es una preocupación sólo académica. El tema está situado en el centro del debate mundial sobre la nueva configuración de las sociedades del futuro siglo.

Hablar de nación implica hablar del tema del poder, tanto en la etapa de constitución de esta formación histórica, como en su extensión posterior y su proyección al futuro. Debemos tener en cuenta, además, que el concepto no remite a una significación unívoca, como acontece también con el concepto de democracia. Desde nuestra realidad nos interesa indagar si hemos efectivamente constituido una nación, a través de la unidad nacional, con un proyecto común de destino.

Quisiera, para internarme en el tema, hacer una breve reflexión sobre el origen de esta construcción político social. Su configuración primera se dio en un tiempo y espacio histórico determinados, como resultado de un proceso de confrontación de diversos actores sociales, en el cual intervinieron factores políticos, económicos, sociales, jurídicos, culturales. Convergen en este proceso: una nueva cultura designada con el nombre de Iluminismo, que somete a revisión crítica toda la realidad en nombre de los derechos soberanos de la razón; el progreso que alcanzan las ciencias y dos grandes corrientes filosóficas: el racionalismo y el empirismo; y la nueva clase social que se viene constituyendo: la burguesía.

Este gran movimiento histórico transforma al estado feudal en monarquía nacional, concentrando en esta nueva configuración unitaria, la dispersión del poder que caracteriza al estado feudal. Asumió diferentes formas: en Inglaterra, con la revolución de 1690, la de monarquía constitucional en la que el poder del monarca está limitado por órganos representativos de los derechos del pueblo. En Francia, la de una monarquía absoluta fundada en el derecho divino. En este país, con el crecimiento y consolidación de la burguesía, el sistema monárquico absolutista aparece

como restrictivo para su expansión, y surgen entonces las ideas de igualdad jurídica y de libertad, como derechos del individuo frente al Estado.

Otro hito importante es la revolución de 1776 en América del Norte, con la declaración de la independencia y la instauración de la República de los Estados Unidos.

A partir de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, el concepto de nación pasa a nombrar a todo un pueblo unido hacia un destino común, es decir, el pueblo se entiende como nación no porque esté unido **naturalmente**, sino porque está unido **políticamente** en una comunidad de destino que sus integrantes deciden como hombres libres.

Las burguesías locales, que se consolidaron bajo la protección del nuevo poder concentrado, buscaron su participación en el Estado, estructurando la unidad nacional en función de objetivos determinados que captaron la voluntad de amplias mayorías, creando así las bases de la legitimación y consenso del nuevo ordenamiento cuya consolidación se logra entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. El eje de este proceso es la experiencia de una integración política interna relativamente exitosa.

Nación y nacionalismo (el deseo de formar o sostener un estado nacional), son así fenómenos históricos que podemos considerar relativamente recientes, que se extendieron con rapidez creciente, convirtiéndose en la idea-fuerza de la historia contemporánea. Sus motores principales fueron dos movimientos históricos: la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, que desde Francia difundieron esta concepción a otros países europeos y, por extensión a América latina; y el movimiento anticolonialista del siglo XX, que la diseminaron en Asia y Africa.

En nuestro Continente Sur, las naciones surgen de la dispersión de la América española y el resultado fue la debilidad estructural de los nuevos países, que no pudieron consolidar un pacto de unidad nacional para un proyecto nacional, ni un bloque de poder interno capaz de liderar con continuidad un proceso económico-social y político exitoso. Debilidad que sustenta la tesis de Hernández Arregui de que hay un nacionalismo defensivo de los pueblos débiles y un nacionalismo expansivo o que tiende a él, en las naciones europeas y Estados Unidos.

Sabemos que existe disparidad entre la proclamación de la nación y la realidad política de muchas de las nuevas naciones. La existencia de la nación es incongruente con la inestabilidad política, los golpes militares, la intromisión desde el exterior, el hecho de que decisiones fundamentales económicas, de seguridad nacional, de alianzas, se toman a nivel transnacional, sin tener en

cuenta ni los intereses ni la capacidad de decisión de los estados nacionales. Como dice Hernández Arregui: "una cosa es la forma jurídica de nación y otra la nación real negada en los hechos". De allí surge la necesidad de construir la real integración de nuestra sociedad, ejercer nuestra autodeterminación política, resguardar nuestra identidad cultural, construir nuestro proyecto nacional.

Esta es una tarea urgente, en un mundo de interdependencia creciente donde la ideología transnacional propone la superación de los estados nacionales como formas organizativas anacrónicas frente a la nueva época civilizadora que se abre al próximo siglo. Nuestra afirmación anterior de construcción aparece así en disonancia con el discurso que va delineando los perfiles futuros para la humanidad en su conjunto, por parte de los países hegemónicos.

Vemos así que la "era tecnocrónica" que plantean Brzezinsky y la nueva derecha, implica lo que denominan la paradoja de nuestra época: una mezcla explosiva de unificación (por medio de las comunicaciones) y de fragmentación (por disolución de las lealtades institucionales e ideológicas consagradas), es decir, un mundo cada vez más unido y al mismo tiempo cada vez más conflictuado y separado. En la "ciudad global" que predicen para el futuro, se relajan los sentimientos de lealtad a la nación y se define críticamente la idea de estado nacional. En los planteos de la nueva derecha, las naciones serían reemplazadas por las multinacionales, los estados por las corporaciones privadas y los partidos políticos por los intereses organizados. Nosotros evaluamos que este proyecto plantea un campo propicio para ejercer un poder total sobre la sociedad del futuro, por parte de los países hegemónicos.

Estamos entonces ante una nueva ola de concentración del poder, totalmente inédita, que traspasa las fronteras, avasalla las culturas, domina la economía, controla la información y las comunicaciones, emprende desarrollos tecnológicos de tal magnitud y aceleración que cambiarán las configuraciones de las sociedades actuales y pretenden determinar nuestra forma de inserción en la sociedad global que proyectan, borrando nuestras raíces y nuestra memoria.

La construcción real o la consolidación de nuestras naciones será un factor determinante para impedir que el poder concentrado de la nueva etapa establezca su hegemonía sobre la totalidad del planeta. No aislándonos en nuestras naciones individuales, sino construyendo a partir de nuestra integración interna un proyecto común en la región, para poder así autodeterminar nuestra forma de inserción en esa "sociedad global" del futuro.

La ideología dominante que nos llega desde los países hegemónicos, nos dice que han perdido vigencia las ideologías, las naciones las autonomías, nos hablan de la ingobernabilidad de la democracia, de soluciones neoconservadoras, del agotamiento de la sociedad de bienestar. Pero nosotros no hemos alcanzado a ser verdaderamente una nación, no hemos podido ser totalmente autónomos, casi no hemos tenido democracia, ni bienestar, han combatido nuestra ideología. A pesar de estas contradicciones entre el discurso y nuestra realidad, hay quienes siguen aceptando los mandatos de los países hegemónicos, planteados como desarrollos teóricos "científicos", acuciados por el miedo de no ser "modernos".

¿Aceptaremos pasivamente que nos condenen a desaparecer?

El conflicto de la época se instala entonces entre la cada vez más creciente concentración del poder económico mundial y el carácter particular de los estados nacionales, basados en los principios universalmente aceptados de soberanía y autodeterminación. El despliegue del poder económico y el desarrollo de sus proyectos tecnológicos, cuestionan estos principios universales e implican un profundo quebrantamiento de las identidades sociales, culturales y nacionales. Como dice María Cristina Reigadas en su trabajo sobre "Identidad y mundo transnacional", "destrucción requerida desde ese mismo proyecto de planetarización tecnocrática y corporativa, profundamente antidemocrático, que para el Tercer Mundo significa la amenaza creciente de su propia disolución".

Esto plantea la necesidad de debatir, desde la política, la vigencia de la "Era de las naciones".

Así, la revalorización del concepto de nación es todavía más importante cuando esta idea está cuestionada en su misma esencia y se discute arduamente sobre el estadio de desarrollo en que se encuentra actualmente la comunidad internacional. El uso y abuso de conceptos tales como interdependencia, regionalización e internacionalización de los mercados, que en más de un caso vienen a reemplazar bajo nuevas formas a la vieja concepción de las esferas de influencia, requiere definir primero si efectivamente ha concluido el proceso hacia la independencia política y de consolidación económica nacional que se inició junto con el final de la segunda guerra mundial y el comienzo del proceso de descolonización.

El desmoronamiento de algunos viejos imperios coloniales, así como el transitorio aflojamiento de los lazos de dependencia que acompañan a los grandes conflictos armados —cuando en ellos están involucradas las potencias rectores del mundo— abrieron paso a la descolonización. Y el surgimiento de naciones formalmente independientes hizo suponer a algunos que con ese gigantesco paso

adelante que dieron los países en vías de desarrollo (del Tercer Mundo) ha concluido en lo fundamental el viejo orden colonial y sus perniciosas consecuencias para los pueblos del mundo.

Los hechos desmienten esta presunción. No sólo continúan los conflictos armados en los que están inmersos varios pueblos que todavía pugnan por constituirse como nación, sino que muchos estados nacionales ven condicionado su poder hasta punto tal que su condición de naciones formalmente independientes está en cuestión cuando decisiones fundamentales para su accionar autónomo les son impuestas desde fuera, sin contemplar los intereses de sus pueblos o contradiciéndolos abiertamente.

No basta con el logro de transitorias mayorías en los organismos internacionales, donde el peso del número ha permitido alcanzar objetivos limitados, de entidad declarativa en lo fundamental, cuando cuestiones centrales como la orientación de los flujos de capital, el deterioro de los términos del intercambio, el pago de los intereses generados por la deuda externa, la difusión de las tecnologías de punta y de la información, o el mantenimiento de la paz en un marco de seguridad, son resueltos entre unos pocos.

Desde nuestro punto de vista estamos aún inmersos en la "era de las naciones" y la consolidación de los estados-nación constituirá por mucho tiempo una tarea central de la comunidad internacional. Más aún, la consolidación de los estados nacionales, y en algunos casos la misma constitución de las naciones como tales, seguirán constituyendo la fuerza movilizadora del devenir histórico, y de cómo se resuelve este problema depende en buena medida el progreso de los pueblos y también la preservación de la paz.

En relación a la vigencia del concepto de nación predomina a veces un doble discurso que bien pronto queda al descubierto. Así por ejemplo los avances hacia Europa unificada en 1992 han hecho aflorar la polémica sobre el rol de los estados nacionales, y son precisamente los más celosos defensores de la irrestricta libertad económica quienes más se oponen a la delegación de facultades de los estados en organismos de tipo supranacional. En cualquier caso la Europa de las patrias no es motivo de discusión y las concesiones en materia económica no ponen en cuestión la soberanía de las naciones, ni tampoco el derecho a la preservación de su identidad política o cultural.

Algo similar sucede en la zona de libre comercio establecida en el norte de nuestro continente, que incluye, es cierto, una fuerte liberalización de los intercambios económicos, pero que está complementada por mecanismos que permitan preservar la autonomía

e independencia de los estados miembros en cuestiones como la defensa nacional, política exterior, cultura y educación, así como las salvaguardas del caso en el mismo terreno económico.

Aún en el mismo bloque socialista el concepto de nación evidencia un fuerte arraigo y la preservación de su entidad es causa de peligrosos conflictos todavía irresueltos. Aunque no de manera explícita la teoría de la "soberanía limitada", tan en boga en los años '60 y parte de los '70, ha debido ceder paso a un mayor respeto por los intereses nacionales, porque de lo contrario los conflictos se tornan inmanejables, mientras que un elemental sentido de la realidad impone la búsqueda de soluciones que den respuesta a esos intereses.

Sin embargo, los apologistas del monismo unificador que todo lo iguala formalmente con el argumento de la ampliación de los mercados y la necesaria magnitud de las escalas de producción, abandonan rápidamente el fundamento de su propuesta cuando se trata de discutir temas que sí importan colectivamente al conjunto de las naciones en vías de desarrollo. Llegado el momento de analizar la necesidad de un nuevo orden económico internacional o, más concretamente, de considerar el problema de la deuda externa, inmediatamente se apela al más crudo formalismo para justificar ahí sí la consideración caso por caso. La pretensión aludida no resiste el menor análisis, cuando la realidad demuestra la existencia de múltiples nexos comunicantes del problema de la deuda que afecta a la mayoría de los países del Tercer Mundo, cuyo abordaje es necesariamente más amplio que la relación entre el país en cuestión y la banca acreedora o ese mismo país y las grandes potencias económicas individualmente consideradas.

La tendencia a la regionalización económica y política es sin duda uno de los fenómenos más importantes del mundo moderno. No puede ignorarse la gravitación que tendrán —no sólo el siglo XXI sino ahora mismo— la Europa unificada hacia 1992, la unión aduanera entre Estados Unidos y Canadá y el incipiente agrupamiento de naciones en Extremo Oriente con Japón como elemento aglutinador, así como la siempre permanente vigencia del Comecon en Europa Oriental. Es evidente entonces que el regionalismo se va imponiendo, estimulado por razones económicas y tecnológicas mientras que su sentido político futuro es todavía una incógnita a develar, pero a cuyo respecto sabemos desde ya que hay varias interpretaciones y propuestas no siempre coincidentes entre sí. Aquí cabe distinguir entre lo que es un proceso objetivo hacia la regionalización y la creación de espacios económicos ampliados, y el designio estratégico-político que se le quiera imprimir en cada caso. Como siempre, la historia tiene causas objetivas que explican

un devenir pero también influye la decisión política que fija el rumbo y desalienta la pretensión determinista o los sucesivos "destinos manifiestos" con los que se ha querido condicionar la soberanía de las naciones.

Los estados nación no son tan sólo fichas en un tablero mundial, ni tampoco conglomerados que pueden posicionarse según la conveniencia de estrategias que están al servicio de algunas grandes potencias. El impulso vital que surge de las entrañas mismas de cada nación seguirá siendo una fuerza a considerar, y toda solución que no tenga en cuenta la permanente vigencia de esa categoría esencial será efímera y hasta fuente potencial de conflictos que de otra manera podrían evitarse.

El concepto de nación no es una categoría gaseosa sino algo muy concreto y práctico, y sólo desde su existencia objetiva es que puede explicarse el doloroso proceso de construcción de las naciones y el generoso tributo que han hecho los pueblos para alcanzar ese objetivo, en muchos casos todavía incumplida. Un pueblo deviene en nación cuando, constituido como comunidad orgánicamente estructurada (comunidad organizada), legitima un sistema de gobierno que es reconocido por otros poderes nacionales y encarna la voluntad mayoritaria, para alcanzar fines compartidos.

Como lo señala Héctor Muzzopappa en su trabajo "El tema del sujeto: el pueblo como poder". La nación como poder reconocido por otros en tanto que poder no es algo que acontezca de inmediato. Un pueblo no pasa a ser nación sólo por el hecho de proponérselo; es necesario, además, que pueda constituirse en potencia creadora en voluntad configuradora de su entorno, voluntad capaz de sustraerse al imperio de otras voluntades en la afirmación de sus valores, independientemente de la potencia y realidad de ellas. Para ello es necesario que quiera ser y que tenga noción de eso que quiere ser".

Como dije anteriormente, la nación es comunidad de destino libremente elegido y cuando un pueblo decide construir su identidad en un determinado objetivo, ejerce su libertad. No basta con tener este objetivo compartido, sino que la elección de fines debe ser hecha libremente por el pueblo, para lo cual debe regir efectivamente la democracia. El objetivo superior, que excede a la simple suma de los legítimos intereses individuales debe ser definido por un sujeto que lo legitima y éste no es otro que el pueblo. Pero para legitimarlo debe hacerlo en un marco de libertad orgánicamente estructurada en un sistema que en tanto que promueve la participación del individuo y respeta la voluntad mayoritaria es también democrático. No hay mesianismo alguno, por iluminado

que se crea, capaz de reemplazar a la voluntad popular orgánica-mente expresada en un marco participativo, respetuoso de la libertad individual.

Esa nación se construye a diario y su objetivo no se agota en la mera repetición de lo ya aportado por las anteriores generaciones, ni tampoco es imitación de lo ocurrido en otras latitudes. Por el contrario, su especificidad es producto de la imaginación, voluntad y creación del pueblo en cada época, así como de la decisión de afirmarse como una comunidad con poder, capaz de ser reconocida por otros, apta para posicionarse y afirmarse en su peculiaridad, reconociendo sus valores y defendiéndolos frente a la pretensión de calificarlos tan solo como una curiosidad antropológica.

La vigencia y constante recreación de estos elementos es lo que le da sentido a la nación y ello es perfectamente comprobable en la experiencia y también en la contemporaneidad de las naciones que marchan a la cabeza del mundo y en todos aquellos países —grandes o pequeños— que han ganado un lugar indiscutible en la comunidad internacional organizada, más allá de sus diferencias de sistemas políticos, formas de gobierno, cultura, raza o religión.

Y en todas esas naciones también se comprueba que —más allá de las formas— El Estado como órgano ejecutor de las funciones de gobierno es capaz de conducir a la comunidad nacional hacia un fin determinado en el marco de la ley. Sin un estado ejecutor —con el grado de intervencionismo que cada comunidad libremente decida—, eficiente en el manejo de los asuntos que conciernen a toda la nación, capaz de aunar voluntades para hacer realidad los objetivos nacionales y legitimado en su función por la sujeción a la ley, la acción está imposibilitada de cumplir su destino histórico. El logro de este piso básico que es la organización nacional con las instituciones que permitan la libre y orgánica expresión del pueblo, exigió en la Argentina considerables esfuerzos que consumieron una larga etapa histórica, pero no por ello la tarea culminó exitosamente. Como toda institución social el estado ha experimentado cambios y mutaciones extraordinarias a lo largo de las décadas, y no siempre en un camino de avance. El deterioro y la crisis del Estado expresa, en la Argentina al menos, un costado de la crisis de la nación misma. El gobierno se torna incapaz de estructurar el esfuerzo popular y mucho más todavía de alcanzar los objetivos nacionales, en parte por la crisis del Estado, aunque el advenimiento de la democracia ha permitido recuperar la legitimidad de sus gobernantes, abriendo paso a la consolidación del sistema para crear un marco racional en el cual sea posible dirimir pacíficamente las diferencias de intereses.



Esta crisis del Estado es causa y efecto a la vez de la crisis de identidad nacional que padece la Argentina, en buena parte como resultado de la anomia política en la que estuvo sumido el país durante los largos años de dictadura. Los mejores esfuerzos de los ciudadanos debieron gastarse en la recuperación del derecho a decidir libremente, mientras que la faz propositiva quedó a menudo postergada porque previamente había que ganar algo todavía más esencial, como lo es el respeto a la voluntad popular, elemento generador de todo proyecto exitoso.

Ahora lo concreto es que la nación está en crisis, quizá una de las más serias de su historia moderna porque el modelo de país en que se fundaba está definitivamente agotado y debe ser reemplazado por otro que dé cuenta al mismo tiempo de los cambios habidos en la arena internacional y de la misma crisis interna que ha trastocado valores fundamentales y ha deteriorado irreversiblemente algunos instrumentos muy útiles en el pasado reciente, pero que ahora están atacados en su aptitud modificatoria de la realidad o bien han demostrado su inutilidad.

No se trata ya más de introducir retoques cosméticos en un modelo que ha perdido todo dinamismo. Tampoco basta con depositar todas las esperanzas en el funcionamiento formal de la democracia, como si el rito electoral o el mero ejercicio reiterativo de las libertades públicas fuera la llave que permita acceder a la verdad. Hace falta sentar las bases de un nuevo modelo de nación y la democracia sigue siendo el marco y el método necesario para que esa transformación sea producto de la decisión popular y expresión de la mayoría orgánicamente expresada, y tenga al mismo tiempo el necesario consenso que es imprescindible para colocar el grueso de las voluntades en el rumbo elegido.

La reedición de experiencias pasadas constituiría una suerte de caricatura de la historia, así sea que las fuentes de inspiración se busquen a fines del siglo pasado o en el pragmatismo que acompañó a la crisis de los años '30. Tampoco cabe la burda imitación de soluciones que en la posguerra fueron valiosas e innovadoras, pero que ahora carecen del marco apropiado. La crisis es inédita y las soluciones también deben serlo.

Cuando la nación está atacada en sus mismas bases de sustentación y se cuestionan aspectos básicos de su esencia hay que buscar un nuevo marco en el cual proyectar a la siempre vigente categoría de nación. Con otras formas y otros métodos se trata de recuperar algo que es sustantivo para esta comunidad que todavía lucha por construirse como nación autónoma, económicamente desarrollada y socialmente justa. Ese marco, reitero, debe ser América latina, para desde allí, en comunidad con los pueblos hermanos

de América, proyectarse hacia el mundo superando los límites de una autarquía que ya es imposible, aún en los países continente y todavía con más razón en la Argentina.

La integración latinoamericana debe ser complementada —necesaria e inequívocamente— con la integración nacional, pues una nación desarticulada internamente, sin proyecto nacional propio, no está preparada para una asociación tan ambiciosa como la que presupone la integración con los países de la región, un proceso que implica importantes concesiones al servicio de un interés superior. A menudo se plantea la integración nacional como previa y antagonica con la integración regional, cuando en realidad son dos procesos complementarios ya que el ámbito para la realización de la nación ha pasado a ser un espacio más vasto que el territorio nacional. En más de una oportunidad ese falso antagonismo es tan solo la excusa para oponerse a la integración, reavivando viejos conflictos y antiguos miedos que ahora no tienen razón de ser.

La integración latinoamericana, además de las razones históricas que le dan fundamento, se explica por la necesidad de responder a una nueva realidad internacional que supone una gigantesca concentración de poder, de una dimensión hasta ahora desconocida. Sería irresponsable apostar a la mitología de David contra Goliath porque aquí no hay artículo mágico alguno que permita superar, en forma individual y aislada, la enorme brecha que está abriéndose entre los poderosos de la tierra y las naciones en vías de desarrollo. Para terciar en esta lucha por el reparto del poder mundial y la apropiación de las reservas de materias primas o el usufructo de los avances tecnológicos hace falta una masa crítica tal de poder acumulado que permita intervenir en esa disputa con posibilidades de éxito.

Si bien el proceso integrador tiene sustancia económica decisiva, su contenido es muchísimo más amplio, mientras que al factor impulsor es de orden político, por lo menos en su etapa inicial. En otras palabras, la integración es una tarea demasiado amplia para dejarla sólo en manos de los economistas. No sólo es una tarea que requiere la conducción de los gobiernos y el protagonismo de los pueblos, sino que el proyecto integrador debe extenderse a todos los ámbitos, porque cada uno de los logros que se obtenga en las diversas áreas del quehacer humano estimula positivamente los avances en las demás. Para que la integración tenga resultados liberadores debe facilitar la más amplia participación popular, creando condiciones que permitan romper los compartimentos estancos y remover las barreras de orden jurídico, cultural, educativo e ideológico que a menudo traban el acercamiento entre los pueblos de la región.

Los intercambios científicos, el mejoramiento de las comunicaciones, los proyectos comunes en materia de defensa nacional y regional, la eliminación de conflictos entre las naciones del área, así como los crecientes vínculos entre las organizaciones sociales no gubernamentales, junto con la intensificación del tráfico fronterizo, constituirán formas que habrán de potenciar la integración y ayudarán sin duda a remover los obstáculos económicos.

Como unidades aisladas, las naciones de América latina —fuere cual fuere su magnitud y estado de desarrollo— están amenazadas en su existencia misma y cada vez se les hace más difícil jugar un rol activo en las corrientes de intercambio de capitales, de tecnología y aún de mercancías. Como decía al hablar del proyecto de la nueva derecha, el reparto de poder que se está concretando a escala mundial amenaza con dejar fuera de la escena a muchas naciones en vías de desarrollo, confinándolas al menguado rol de proveedoras de materias primas o de artículos manufacturados con escaso valor agregado, cuya competitividad se fundamenta en los bajos salarios. Tampoco son receptoras de inversiones y, por el contrario, expulsan capitales o tributan el grueso de su acumulación para amortizar parte de los intereses generados por la deuda externa. Los condicionamientos que se les imponen asumen formas insólitas, habiéndose llegado a formas de intromisión en sus asuntos internos —en algunos casos con el pretexto de preservar el medio ambiente— que recuerdan los peores momentos de comienzos de siglo.

La pretensión de hacerse un lugar bajo el sol aprovechando algunos nichos comerciales en el mercado interno de países altamente desarrollados, o bien confiando en el incremento de importaciones de algunos de esos países, proceso que se explica por la subsistencia de abultadísimos déficit fiscales cuya permanencia en el tiempo es motivo de disputa y diferencias entre los poderosos de la tierra, parece por lo menos discutible y seguramente no conforma una estrategia consistente.

Es cierto también que la integración latinoamericana constituye una tarea de largo aliento, preñada de dificultades, con obstáculos teóricos y prácticos imposibles de ignorar. Las asimetrías económicas, las dificultades de balance de pagos que enfrentan todos los países de la región, y hasta una historia de frustraciones y mezquindades que han dominado los sucesivos intentos de integración económica, constituyen un lastre importante. Pero el problema central sigue siendo político y radica en la débil comprensión de la realidad en que deben desenvolverse las naciones latinoamericanas y del agotamiento que evidencian las propuestas tradicionales.

Cuando se analiza el proceso de integración europ<sup>e</sup>o queda demostrado que su matriz generadora fue política y que sólo desde la política pudieron enfrentarse primero, y superarse después los obstáculos económicos que eran muchos y continúan siéndolo aún hoy. La voluntad política integradora es el factor decisivo de este cambio que está gestándose todavía tímidamente y con escasos resultados concretos en la región Sur de América.

Cuando se habla de voluntad política esta responsabilidad remite inmediatamente a un sujeto claramente definido: la clase política. A ella le corresponde tomar la delantera en esta tarea que exige firme decisión e ideas renovadoras. Así como la Europa de las patrias no sería concebible sin la infatigable labor de Jean Monet y de Maurice Schuman, tampoco sería la realidad que es hoy al margen del aporte que hicieron Charles De Gaulle, Konrad Adenauer o Alcide De Gasperi. No se llegará al logro del objetivo integrador sin que los principales dirigentes políticos de la región hagan suya esa bandera, ni tampoco se avanzará en esa dirección sin que los intelectuales más esclarecidos y activos se pongan al servicio de esta causa.

Para encontrar razones que avalen el proceso de integración no hay que confinarse en el análisis de los escasos y hasta negativos resultados económicos obtenidos en estas últimas décadas. Allí sólo se encontrarán motivos para la desconfianza y el pesimismo. Es en la política, en la voluntad de superar este difícil trance por el que atraviesan los países latinoamericanos, en la necesidad de consolidar los estados nacionales y en la historia, que se encontrarán las razones de peso para intentar la hazaña que iniciaron José de San Martín y Simón Bolívar.